

JUZGADO PROMISCOVO MUNICIPAL DE SIBATE
Sibaté, veintidós de agosto de dos mil veintidós

Se encuentran al Despacho las presentes diligencias a fin de proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la petición de acción de tutela instaurada por el señor PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE.

ANTECEDENTES

El señor PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON quien actúa en nombre propio, instauró ante este Despacho acción de tutela en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE, solicitando se tutele el derecho fundamental de petición.

Como fundamento de su petición el accionante narra los hechos indicando que el 23 de junio de 2022 envió derecho de petición con radicado N°2022064958 ante la accionada, que no ha obtenido respuesta ni se le han enviado las copias de los documentos públicos solicitados a los que tiene acceso según el artículo 74 de la Carta Política. Que se debe tener en cuenta que en caso de que argumenten que no son competentes para resolver la petición, es su obligación legal remitirla de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 1437/2011.

Que con la omisión de responder por parte de la accionada frente a la petición estima que se está violando su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Así mismo hace alusión al artículo 20 de la Carta Magna, al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

Reitera que la no respuesta por parte de la accionada constituye omisión violatoria de su derecho fundamental de petición.

Que la acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 5 y 9, 37, 38 del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es que se garantice su derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas y recibir pronta resolución. Trae a colación la sentencia T-526/1992.

Como fundamento jurídico invoca el artículo 23 y 86 de la Constitución Política, Decretos Reglamentarios 2591/1991, 306 de 1992 y D.L 1382/2000; artículo 6 del C.C.A; Decreto 2150 de 1995, artículo 10, artículo 16 parágrafo único de la Ley 1437/2011.

Pretende que se le ampare su derecho fundamental de petición, que se ordene a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia produzca respuesta.

Allega como pruebas el accionante lo aportado en el archivo de tutela.

Este Juzgado avoco conocimiento y dispuso por el medio más eficaz notificar en legal forma a la accionada, para lo cual se libraron las comunicaciones como obra en el expediente.

JOSE ALBEIRO CASTILLO MARTINEZ, obrando en calidad de Profesional Universitario de la Sede Operativa Sibaté de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, ejerciendo su derecho a la defensa da respuesta a cada uno de los hechos planteados por accionante PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON en su escrito de tutela.

Aclara que la Sede Operativa de Sibaté, es un ente de Orden Departamental que depende de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, adscrito a la Gobernación de Cundinamarca.

Que el artículo 23 de la Carta garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener respuesta de fondo a sus solicitudes de interés general o particular. Trae a colación la Sentencia T-377 de 2000 y Sentencia T-249 de 2001 reiterada por las sentencias T-1046 de 2004, T-180a de 2010, T-691 de 2010, T-161 de 2011.

Indica que el accionante considera que se le han vulnerado sus derechos fundamentales y proceden a pronunciarse frente a eso a fin de que haya claridad respecto de la no transgresión a los derechos que pretende sean cobijados por el Juez de Tutela.

Que la acción constitucional tuvo origen en la petición que hiciera el señor accionante el 26 de enero de 2022, la cual fue radicada bajo el número 2022008750. Trae a colación el artículo 14 de la Ley 1755 del 2015.

Afirma que la petición no fue radicada en la Secretaría de Transporte y Movilidad de Sibaté y por ende; no se cumpliría el primer elemento de ámbito de protección constitucional, que esa Secretaría de Transporte y Movilidad de Sibaté no goza de competencia para resolver solicitudes que versen sobre prescripción, atendiendo a que la jurisdicción coactiva se encuentra a cargo de la Oficina de Procesos Administrativos de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca.

Sostiene que la Secretaría de Transporte y Movilidad de Sibaté no es competente para pronunciarse de fondo frente a la prescripción y mas aún cuando no fue radicada en esa entidad, por tanto, se configura lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-875 de 2010.

Que, en atención al principio de colaboración entre entidades, que la contestación del derecho de petición elevado por el accionante fue despachada y notificada.

Solicita se desestime lo pretendido por el accionante, toda vez, a la data ya se brindó una respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente, no significando que por no despachar favorablemente lo pretendido se haya transgredido algún derecho, luego, no puede pretender el accionante desconocer la contestación brindada y notificada, para que por medio de la vía constitucional se obligue a lo imposible.

Que se puede observar en las peticiones elevadas por el señor accionante que busca de una u otra manera obtener respuestas positivas a sus pretensiones y se permite aludir la vulneración de sus derechos, tanto así que procedió a dirigirse ante el Juez de tutela requiriendo la respuesta a una petición que ya ha sido resuelta, dejando de lado que esta herramienta de protección de derechos fundamentales no reemplaza y menos es una segunda instancia a la cual puede acudir a fin de impugnar.

Reitera que se le hizo saber a la parte actora se emitió Resolución N°12824 del 2022/07/04 mediante la cual se negó la declaratoria de prescripción por no reunirse los elementos para su configuración.

Refiere la sentencia T 146-12, T 369 -13.

Recalca el accionado que no hubo vulneración de derechos fundamentales del accionante, ya que esa Sede Operativa de Sibaté no goza de competencia para emitir contestación frente a la prescripción.

Que en atención a los derechos fundamentales que pretende sean protegidos por el señor accionante y no se observan vulnerados por la actuación de esa entidad, y que realizado el examen del entorno y valoradas en conjunto las circunstancias, se demostró que efectivamente no es necesaria la intervención constitucional a efectos de ordenar la protección de los derechos accionados por el señor PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON, toda vez que la solicitud elevada se resolvió dentro del término establecido por la Ley.

Solicita se declare improcedente el amparo de la presente acción Constitucional.

Trae a colación la sentencia T-130/14.

Afirma que aún se encuentran en términos para emitir contestación, conforme lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

Allega como pruebas los relacionados en el acápite de pruebas.

CONSIDERACIONES

En virtud al derecho constitucional establecido en el art. 86 de la Carta Magna el señor PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON, acude ante el juez a fin de que mediante un trámite preferencial y sumario se le tutele el derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Política.

El art.1º preceptúa: "...Colombia es un estado Social de derecho organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general..."

Nuestra Carta magna en su art. 2 indica: "... Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo..."

El art. 23 preceptúa: " Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El derecho de petición está consagrado en la carta magna para que todas las personas que han presentado peticiones obtengan una pronta respuesta.

De igual forma este derecho es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad que van a recibir una respuesta pronta, oportuna sobre su pedimento, esta repuesta debe definir de fondo la solicitud elevada o por lo menos explicar con claridad las etapas, medios términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó, así se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, esa omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud, es de por sí una violación al derecho de petición.

Como se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, "la naturaleza del derecho de petición, y en particular su núcleo esencial, como derecho fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que resuelva en su fondo lo pedido por el particular.

Igualmente, ha establecido la Honorable Corte Constitucional que el núcleo esencial de este derecho está determinado por la pronta respuesta o resolución a lo pedido, respuesta que se entiende dada cuando se resuelve de fondo la cuestión planteada, sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante y, en la efectiva notificación del acto, a través del cual, se resuelve la petición presentada.

Revisadas las presentes diligencias, observa este Despacho que del material probatorio que aparece relacionado y anexo al expediente, se puede concluir que el accionante radicó derecho de petición ante el sistema PQRS de la Gobernación de Cundinamarca.

Se observa dentro de las documentales allegadas que la accionada procede a remitir a este Despacho Judicial respuesta dada mediante oficio CE - 2022678224 del 2022/07/04 emanada por el Jefe de la

Oficina de Procesos Administrativos de la Secretaría de Transporte y Movilidad en donde le fue puesta en conocimiento la Resolución N°12824 del 2022/07/04 por medio de la cual se resolvió la solicitud de prescripción del comparendo N°1018079 y enviada al correo electrónico cuentadecobro21@gmail.com el pasado 6 de julio de 2022.

En este orden de ideas y como quiera que la accionada SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE allega documentación respecto de la contestación que se dio al derecho de petición por parte de la Oficina de Procesos Administrativos de la Secretaría de Transporte y Movilidad mediante oficio CE - 2022678224 del 2022/07/04 en donde le fue puesta en conocimiento la Resolución N°12824 del 2022/07/04 por medio de la cual se resolvió la solicitud de prescripción del comparendo N°1018079 y enviada al correo electrónico cuentadecobro21@gmail.com el pasado 6 de julio de 2022, no se ha de tutelar el mismo por cuanto como se dijo anteriormente ya fue contestado el derecho de petición por la entidad competente.

Teniendo en cuenta lo anterior se desprende que el derecho de petición fue contestado y como en reiteradas oportunidades se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, *"Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado..."*

Es así como de conformidad con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se entiende que la respuesta dada para resolver de fondo la cuestión planteada, es sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante.

Es de anotar que, si bien es cierto, que no se vinculó a la Oficina de Procesos Administrativos de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, también lo es, que dentro de la contestación de la presente acción de tutela por parte de la Sede Operativa de Sibate la misma allega la respuesta que hiciera esa dependencia al señor accionante.

Esta decisión se ha de notificar por el medio más eficaz, advirtiéndole a la parte accionante y a la accionada que la anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser así, se ha de remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibate Cundinamarca, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. NO TUTELAR el derecho petición consagrado en la Constitución Nacional, incoado por el señor PAULO ROSSI MARTINEZ CALDERON identificado con la C.C.N°80.239.123, en contra de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Notifíquese la anterior decisión a la parte accionante y a la accionada, mediante cualquier medio idóneo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992.

Tercero. La anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser impugnada remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,


MARTHA ROCÍO CHACON HERNANDEZ